



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio
Ambiente**

Distr.
Limitada

UNEP/OzL.Pro/ExCom/32/18
7 de noviembre de 2000

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL
FONDO MULTILATERAL PARA LA APLICACIÓN
DEL PROTOCOLO DE MONTREAL

Trigésima segunda reunión
Ouagadougou, 6-8 de diciembre de 2000

**PRINCIPIOS GENERALES PARA LOS ACUERDOS ENTRE GOBIERNOS
Y ORGANISMOS DE EJECUCIÓN REFERENTES A PROYECTOS NUEVOS Y
RENOVADOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (DECISIÓN 30/7 c))**

I. Introducción

1. En virtud de la Decisión 30/7 sobre la evaluación de los proyectos de fortalecimiento institucional, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría que preparase, en colaboración con los países del Artículo 5 y países que no operan al amparo del Artículo 5 y con los organismos de ejecución interesados, principios generales para concertar acuerdos entre los gobiernos y los organismos de ejecución sobre proyectos nuevos y renovados de fortalecimiento institucional que incorporen los elementos citados en el párr. b) de la Decisión 30/7 (adjunta como Anexo I), reconociendo a la vez que esos acuerdos deberían ser apropiados y adaptables a la situación concreta en cada país. En esos principios debería destacarse que las medidas que se adopten sólo tendrían que exponerse en términos generales en el acuerdo de fortalecimiento institucional.

2. En su esfuerzo por llevar a la práctica la decisión, la Secretaría incorporó los elementos mencionados en la decisión a las secciones pertinentes de los acuerdos del PNUMA y de la ONUDI (ambos organismos emplean acuerdos semejantes) y pidió a los dos organismos que decidieran la aplicabilidad de las revisiones propuestas por la Secretaría en términos de sus repercusiones jurídicas y operacionales. También se suministraron al PNUD y al Banco Mundial copias de los acuerdos revisados.

3. El PNUMA y la ONUDI han aceptado las revisiones propuestas por la Secretaría, con algunos ajustes de menor importancia. Tanto el PNUD como el Banco Mundial, en razón de sus diferentes modalidades de funcionamiento y de sus acuerdos jurídicos actuales con los gobiernos beneficiarios para implementar los proyectos de fortalecimiento institucional, han propuesto una modalidad específica para llevar a la práctica los elementos de la decisión.

4. La Secretaría comunicó posteriormente a los miembros del Comité Ejecutivo, el 18 de octubre de 2000, las enmiendas propuestas por cada organismo de ejecución y pidió que se formularan comentarios antes del 27 de octubre de 2000. La Secretaría recibió comentarios de Alemania, Australia, Japón y Suecia, y los transfirió inmediatamente a los organismos de ejecución para que elaboraran sus respuestas. (Los comentarios de Alemania, Australia, Japón y Suecia se adjuntan como Anexo II).

5. Antes del 2 de noviembre de 2000, la Secretaría había recibido respuestas de todos los organismos y ha preparado este documento para la 32ª reunión, incluyendo la respuesta de los organismos de ejecución cuando se juzgaba necesario.

6. La Sección II del presente documento contiene una descripción de las prácticas actuales y la propuesta de enmienda de sus acuerdos actuales presentada por cada organismo de ejecución, y se han incorporado los comentarios de Australia, Alemania y Japón, según el caso.

II. Práctica actual y enmiendas propuestas por los organismos de ejecución

PNUMA y ONUDI

Práctica actual

7. Actualmente, tanto el PNUMA como la ONUDI emplean un acuerdo contractual tipo para asegurar las disposiciones jurídicas de un proyecto o una renovación de fortalecimiento institucional. Una vez aprobado por el Comité Ejecutivo un proyecto o renovación de fortalecimiento institucional, sus datos pertinentes se incorporan al acuerdo contractual tipo que contiene detalles de las actividades, lugar de trabajo y calendario, requisitos de notificación, resultados y rendimientos, necesidades de dinero en efectivo, obligaciones jurídicas del PNUMA o la ONUDI y del país en cuestión, y un presupuesto detallado.

8. Después de autorizado por el gobierno, el documento es firmado por el PNUMA o la ONUDI y por el representante del gobierno.

Enmiendas propuestas

9. Tras consultar a su departamento jurídico en Nairobi, el **PNUMA** aceptó las enmiendas propuestas por la Secretaría y declaró que se proponía usar el formato revisado en sus nuevos proyectos de fortalecimiento institucional. También anunció su intención de encontrar la manera de incorporar las enmiendas a sus acuerdos existentes. El Anexo III contiene una muestra del acuerdo revisado, en la cual se subrayan las enmiendas en las secciones 3.3, 4.1, 6.3.1 y 6.4.1 d).

10. Además, el PNUMA aclaró su postura en respuesta a los comentarios de miembros del Comité Ejecutivo, que se reproduce a continuación:

“Australia plantea una buena cuestión con respecto a la medida en que la Decisión 30/7 es obligatoria para las Partes. Esa decisión contiene 6 párrafos operativos, redactados del modo siguiente:

- b) instar a todos los países del Artículo 5 ...
- c) pedir a la Secretaría ...
- d) dar instrucciones al organismo de ejecución ...
- e) dar instrucciones a todos los organismos de ejecución ...
- f) pedir a los organismos de ejecución ...
- g) pedir al PNUMA y a la ONUDI ...

El orden de obligación, por lo tanto, es evidente. Pero en c) podría interpretarse que la redacción del final – “Estos principios deberán resaltar que las medidas a tomar deben consignarse, si bien sólo en términos generales, en el acuerdo de fortalecimiento institucional.” – es una indicación de evitar demandas y obligaciones concretas en este ejercicio.

Es importante observar que en a) no se requiere que los países del Artículo 5 hagan algo, sino simplemente se los insta a adoptar ciertas medidas para integrar más sus dependencias nacionales del ozono en sus estructuras de gobierno. Por lo tanto, el PNUMA entiende que debería ponerse esta decisión en conocimiento de los países que operan al amparo del Artículo 5, explicarla y aclarar sus repercusiones. Incluso puede alentarse a esos países a ajustarse a los términos de la decisión. El PNUMA lo ha hecho en todas las reuniones de la red en el curso de este año. Sin embargo, según la letra de la Decisión 30/7, no puede exigirse la adhesión a los apartados i) a viii) de su párrafo b) ni esa adhesión puede convertirse en una condición para aprobar o renovar proyectos de FI.

Con respecto a los otros puntos planteados por Australia:

No es correcto suponer que los países preparen un plan de trabajo al comienzo de un proyecto de dos o tres años y luego no lo actualicen. Los planes de trabajo se examinan regularmente como parte de los requisitos de notificación que surgen del proyecto de FI. Por lo tanto, no sería necesario agregar la oración sugerida por Australia. El PNUMA ha incluido esa oración en la sección 3.3 de la propuesta de revisión del documento.

El PNUMA podría aceptar la propuesta de Japón de añadir los términos “Todo el” antes del término “personal” en la nueva sección 6.4.1 d).”

11. En relación con los comentarios de Suecia, el PNUMA considera que mantener los elementos que figuran en los Supuestos se ajusta más al espíritu de la decisión, que insta a los países a aplicar esas medidas. Con respecto a los planes de trabajo, el PNUMA cree necesario incluir los objetivos, metas y otros indicadores de desempeño, en aras de la supervisión y el control financiero.

12. La **ONUDI**, que utiliza un formato semejante al del PNUMA para implementar sus acuerdos de fortalecimiento institucional con gobiernos de países que operan al amparo del Artículo 5, aceptó las enmiendas propuestas por el PNUMA, con las enmiendas que se indican a continuación. Los términos que deben cambiarse están subrayados y la redacción propuesta figura entre paréntesis.

“ 6.4.5 Reclamaciones de terceros contra la ONUDI

El Ministerio (sustituido por Gobierno) será responsable de tratar toda reclamación que puedan formular terceros contra la ONUDI y su personal, y considerará a la ONUDI y a su personal no responsables en caso de cualquier (sustituido por asegurará la inmunidad de la ONUDI y de su personal con respecto a toda) reclamación o responsabilidad resultante de operaciones realizadas por el Ministerio (sustituido por Gobierno) en virtud de este documento de proyecto, excepto cuando el Ministerio (sustituido por Gobierno) y la ONUDI hayan convenido en que esas reclamaciones dimanen de negligencia grave o de conducta deliberada del personal de la ONUDI.”

13. Además, la ONUDI aclaró su postura en relación con el plan de trabajo anual para los proyectos de fortalecimiento institucional, en respuesta a los comentarios de miembros del Comité Ejecutivo, tal como se reproduce a continuación:

“La implementación por la ONUDI de proyectos de fortalecimiento institucional se ajusta a la modalidad de subcontratos semestrales entre la respectiva dependencia del ozono y la ONUDI. En ese sentido, forma parte integral de los subcontratos un programa de trabajo actualizado que suele abarcar el mismo período que el contrato. Esas actualizaciones del programa de trabajo son preparadas por las propias DNO y luego examinadas por la ONUDI. Esas actualizaciones suelen ser semestrales, pero en algunos casos son anuales.”

14. En respuesta a los comentarios de Suecia, la ONUDI sostuvo que desplazar los elementos pertinentes de los Supuestos a los Términos y condiciones generales convertiría a esos elementos en obligaciones contractuales para los gobiernos y exigiría el acuerdo de los mismos acerca de esas condiciones. Por necesidades de control financiero y supervisión, la ONUDI requiere indicadores del desempeño en el plan de trabajo.

PNUD

Práctica actual

15. Actualmente, el PNUD emplea el Acuerdo de asistencia básico normalizado (SBAA), que contrae con cada gobierno al cual suministra asistencia y que le otorga a la organización la autoridad financiera, jurídica y administrativa para actuar, y por lo tanto no necesita otros acuerdos jurídicos o de donación para implementar los proyectos de fortalecimiento institucional.

16. Una vez aprobado un proyecto o renovación de fortalecimiento institucional por el Comité Ejecutivo, el PNUD agrega a la propuesta de proyecto aprobada una portada conveniente, la página de presupuesto, el plan de trabajo y el contexto jurídico. Ese documento se convierte en el proyecto de acuerdo entre el PNUD y el gobierno beneficiario. Luego, el proyecto de acuerdo es firmado por el PNUD, representado generalmente por su representante residente en el país, y por el representante del gobierno beneficiario.

Enmienda propuesta

17. El PNUD no está en condiciones de añadir nada a los acuerdos jurídicos existentes con los países en desarrollo. Se trata de acuerdos amplios que abarcan todos los sectores y están concertados a los niveles máximos en los países interesados. Toda enmienda, ajuste o anexo en los acuerdos jurídicos existentes requeriría la renegociación de esos acuerdos con los países correspondientes, una medida que el PNUD no puede adoptar sólo para los proyectos de FI.

18. Pero el PNUD tiene, como parte integrante del texto de sus documentos de proyecto, una sección denominada **Consideraciones especiales**. El PNUD propone que a partir de la 32ª reunión ExCom en diciembre de 2000, todas las renovaciones de proyectos del PNUD de

fortalecimiento institucional relativo al PM, así como los nuevos aprobados, contengan en la sección **Consideraciones especiales** del documento de proyecto el texto del párrafo b) de la Decisión 30/7 del ExCom.

19. Además, el PNUD formuló las siguientes aclaraciones de su postura en respuesta a los comentarios de miembros del Comité Ejecutivo, que se reproducen a continuación:

- i) **“Carácter de la sección “Consideraciones especiales” en un documento de proyecto del PNUD.** La sección “Consideraciones especiales” en los documentos de proyecto ordinarios del PNUD es jurídicamente obligatoria. En realidad, el título de la sección significa que en la evaluación del proyecto debe hacerse referencia especial a si la entidad beneficiaria ha cumplido o no con las condiciones allí especificadas. En esto se funda la propuesta del PNUD de que, a partir de la 32ª reunión ExCom en diciembre de 2000, todas las renovaciones de proyectos del PNUD de FI relativo al PM, así como los nuevos aprobados, contengan en una nueva sección “Consideraciones especiales” del documento el texto del párrafo b) de la Decisión 30/7 del ExCom.
- ii) **Redacción del texto de la sección “Consideraciones especiales”.** Este tema ha sido planteado por las delegaciones, especialmente Australia. Como la sección “Consideraciones especiales” en un documento de proyecto ordinario del PNUD es jurídicamente obligatoria, el PNUD tiene que asegurarse de que lo que se indica allí refleje exactamente – con detalles precisos – lo que han convenido los propios gobiernos. Por ese motivo, el PNUD había propuesto usar la redacción exacta del párrafo b) de la Decisión 30/7. Como todos saben, se produjo un prolongado y minucioso debate en el Subcomité MEF sobre el texto introductorio preciso que podría emplearse para que pudiesen incorporarse todas las partes que operan al amparo del Artículo 5. La primera oración introductoria del párrafo b) de la Decisión 30/7 refleja ese compromiso. Por lo tanto, el PNUD propone utilizar el mismo texto para asegurarse de que ningún gobierno beneficiario objete el derecho del PNUD a incluir esa sección. Modificar la redacción podría traer aparejados problemas jurídicos en cuanto a la posibilidad de imponer el cumplimiento de las disposiciones, en especial porque el PNUD implementa los proyectos de FI sobre todo en países grandes y medianos consumidores de SAO.
- iii) **Implementación.** La prueba de si la implementación se llevará realmente a cabo se encuentra en los informes de FI preparados por las dependencias del ozono y en el informe anual sobre la marcha de las actividades del PNUD, donde se detalla lo que han hecho las dependencias del ozono en el período anterior. Esto significa que el PNUD tendría que incluir las actividades del plan de trabajo, para controlar la medida en que se cumple con las consideraciones expuestas.”

BANCO MUNDIAL

Práctica actual

20. En la actualidad, el Banco Mundial no concierta acuerdos separados para implementar los proyectos de fortalecimiento institucional, sino que emplea la cobertura general del acuerdo de donación que está obligado a firmar con el gobierno beneficiario cuando el Banco inicia en el país sus actividades relacionadas con el Fondo Multilateral. Según el Banco, los objetivos y las funciones de los organismos pertinentes que se harían cargo de esos proyectos están descritos en los acuerdos de donación. Los términos y condiciones para los componentes de fortalecimiento institucional en los acuerdos de donación varían ligeramente de un país a otro.

Enmienda propuesta

21. El Banco Mundial introducirá una carta de enmienda tipo en el acuerdo de donación para incluir las condiciones que figuran en la Decisión 30/7 sobre los proyectos de fortalecimiento institucional. En el Anexo IV figura el modelo de carta de enmienda.

Annex I

Decision 30/7 (b)

To urge all Article 5 countries with institutional strengthening projects to ensure that:

- (i) the National Ozone Unit is given a clear mandate and responsibility to carry out the day-to-day work in order to prepare, coordinate and, where relevant, implement the government's activities to meet its commitments under the Montreal Protocol; this also requires access to decision-makers and enforcement agencies;
- (ii) the National Ozone Unit's position, capacities, and continuity of officers, resources and lines of command within the authority in charge of ozone issues are such that the National Ozone Unit can carry out its task satisfactorily;
- (iii) a specified high-level officer or a post within the authority is given overall responsibility for supervising the work of the National Ozone Unit and ensuring that action taken is adequate to meet commitments under the Protocol;
- (iv) necessary support structures, such as steering committees or advisory groups are established, involving other appropriate authorities, the private sector and non-governmental organizations, etc.;
- (v) personnel and financial resources and equipment provided by the Multilateral Fund are fully allocated to the task of eliminating ODS consumption and production and are made available to the National Ozone Unit;
- (vi) annual work plans for the National Ozone Unit are prepared and integrated in the authorities' internal planning processes;
- (vii) a reliable system to collect and monitor data on ozone depleting substances imports, exports and production is established; and
- (viii) measures taken and problems encountered are reported to the Secretariat and/or the implementing agency in charge of the institutional strengthening project when required by the Executive Committee.

Annex II

Comments from Australia, Germany, Japan and Sweden**AUSTRALIA**General

1. May we first suggest that the final documents be accompanied, where available, by a full copy of each implementing agency's proforma agreement with A5 government. We believe this would provide useful context to the analysis of the implications of the proposed revisions (unfortunately UNEP's website only has french and spanish versions of its agreement).
2. The IAs' responses raise the issue of whether agreements associated with existing IS projects should be amended. It appears that the World Bank is already taking action to renegotiate the agreements for each of its 6 ongoing IS projects. While the World Bank's efforts are admirable, Australia notes that this is not an option for UNDP. In addition, Australia is concerned at the potential resource implications if UNEP were required to renegotiate each of its 78 agreements.
3. As IS projects are eligible for renewal every two years, Australia suggests it may be a more efficient allocation of resources for implementing agencies and NOUs to merely seek to adopt the revised agreement at the next IS renewal. This being said, Australia would not oppose IAs undertaking the amendment of agreements for existing IS projects where, in the opinion of the IA, such an activity would not be resource intensive.
4. The responses also raise the issue of the nature of the responsibilities assumed by counterpart governments if they agree to the approach taken by the IA that implements their IS project. For example, in reproducing decision 30/7(b) in the Special Considerations section of UNDP's IS project document that commences "To urge all A5 countries with IS projects to ensure that", it appears A5 government are not under any obligation to undertake action to give affect to the elements under (b).
5. Conversely, the incorporation of sub-para (b)(viii) of decision 30/7 into section 6.3.1 of UNEP's agreement proforma makes it mandatory for measures taken and problems encountered in implementing the IS to be

reported to the Secretariat &/or the UNEP DTIE as and when required by the Executive Committee.

6. Inconsistent levels of obligation arising from the approaches are not of themselves a concern as the A5 governments are not bound to particular implementing agencies. Australia's concern lies, rather, in whether the approaches adopted give affect to the intention of decision 30/7(c).

7. Australia's understanding of decision 30/7 is that it sought to empower NOUs to effectively execute their role as the primary mechanism for progressing their countries' compliance with its Montreal Protocol obligations. Para (b) outlined what the ExCom agreed were necessary elements to empowering the NOU, urging the A5 governments to take the steps required to manifest these elements in their country.

8. Para (c) reflects concerns expressed by some ExCom members that: while NOUs may be keen to undertake the actions necessary to realise the elements in (b), their government is not similarly committed; or while the government is committed to exploring options for realising these elements, the implementing agency is not adequately responding to this commitment. Therefore, para (c) seeks to provide a mechanism (the IS project) for formally engaging the commitment of both the A5 government and the implementing agency to creating the necessary environment for an effective NOU and efficient allocation of the Fund's resources.

9. Consequently, Australia suggests that UNDP's approach is currently inadequate as it does not entail a commitment by either the A5 government nor UNDP to undertaking actions which would give affect to the elements of (b). An option could be to replicate the text of para (b) in the Special Considerations section but replace the opening sentence of (b): "To urge all A5 countries with IS projects to ensure that:" with, "The [Ministry/government] and UNDP commit to cooperating to ensure that:".

IA-specific

10. In regard to the proposed revisions to UNEP's agreement:

Australia supports the proposed incorporation of: sub-para(b)(i) and (ii) into section 3.3; (b)(vii) into 4.1; and (b)(viii) into 6.3.1.

Australia notes the incorporation of sub-para (b)(vi) into 3.3. The existing UNEP agreement, however, already has arrangements for the preparation of a workplan (section 4.2-3). It is our understanding that

the arrangements currently only require the preparation of one workplan for the duration of the IS project (our understanding may be incorrect given, at the time of submitting this response, we only had access to a french version of the workplan annex). Consequently, Australia suggests that 4.2-3 could be revised to incorporate (b)(vi). Perhaps by adding the additional sentence to 4.2-3: "The workplan will be prepared on an annual basis and integrated into the [authority's/Ministry's] internal planning processes".

GERMANY

11. Thanks for your Email of 18 October and for keeping us informed about progress in the implementation of Decision 30/7 on institutional strengthening projects. We have consulted within our constituency and we feel that negotiations with IA have somewhat advanced, particularly with respect to the inclusion of relevant text elements in the revised standard Agreement used by UNEP. Concerning UNDP and World Bank we understand that internal revisions/negotiations with A 5 Countries are in progress. Nevertheless it is unclear to us whether the UNDP proposal to include the text of decision 30/7 in the project documents under section "special consideration" achieves the strong legal obligation to adhere to the criteria mentioned in the decision and as intended by the decision. Concerning UNIDO we feel that things need to be speed up and that this IA should provide a response by the time of the 32. ExCom meeting.

JAPAN

12. Our comments on the proposed amendments to agreements between governments and the implementing agencies on new and renewed institutional strengthening projects are as follows:

“In our view, adequate time should be provided for the review of general principles that the Secretariat has been requested to prepare in Decision 30/7(c) at 32nd ExCom, given the importance of the issue.

The general principles should incorporate the notion that ODS reduction/elimination is not merely a matter of economic cooperation but the compliance with the provisions of an international legally-binding instrument and that institutional strengthening is essential for attaining this objective.

As far as UNEP and UNIDO are concerned, we consider the proposed revisions by the Secretariat generally appropriate and welcome UNEP's acceptance of them. While waiting UNIDO's reactions to the proposed revisions, we hope that UNIDO will be able to accept them as well. However,

transplanting 30/7(b) to relevant agreements is only a first step. Of paramount importance is how to ensure each of (i) through (viii) in 30/7(b) becomes a reality. One small suggestion we would like to make may be to add "All the" in front of "personnel" in (d) of "6.4.1 General Terms and Conditions" of the Revised Agreement of UNEP (Annex III) to reflect more clearly what is meant by (v) of 30/7(b).

As far as UNDP and the World Bank are concerned, we can agree, in principle, to the proposed specific modality to implement the elements of Decision 30/7(b), because of their different operating modalities and current legal arrangement with the recipient governments for the implementation of the institutional strengthening projects. However, we would appreciate further explanation from both the implementing agencies as to how they intend to ensure each of (i) through (viii) in 30/7(b) becomes a reality. We would like to emphasize again that institutional strengthening has the special mission to enable A5 Parties to comply with their obligations under the Protocol.

With respect to the World Bank, we look forward to receiving, in due course, a progress report on the Bank's attempt to amend the existing agreements. It is not clear to us what could be the World Bank's proposed specific modality to implement the elements of Decision 30/7(b) with respect to their new institutional strengthening projects. We would appreciate information relating to this at 32nd ExCom.

In relation to reporting to ExCom, the implementing agencies and the National Ozone Units may just as well be reminded of the obligation to submit terminal reports without undue delay in accordance with Decision 30/8 and 31/16."

SWEDEN

Proposed changes in UNEP's (and UNIDO's) agreement on IS projects

13. The suggested additions to section 3.3., 4.1. and 6.4.1 seem to capture well the intentions of Decision 30/7 (b). However, at least points 1, 2, 4 and 5 of the proposed additions to section 3.3. "Assumptions" should rather be included in section 6.4.1. "General Terms and Conditions". It is important that the Fund's support goes to a unit with the necessary position and role. It is understood that it is the prerogative of the Art. 5 government to decide how to organise the Ozone Unit, but it should not be difficult for the government to agree to the *general principles* imbedded in Decision 30/7 (b). Therefore, it should be no problem in incorporating them under "General Terms and Conditions".

14. Annex II of your fax indicates that, under current practise at UNEP and UNIDO, “relevant data from the approved project is entered into the standard contractual agreement which contains details on activities, work plan and schedule, reporting requirements, results and outputs, ...” (Annex II, section I,1.).

15. Decision 30/7 (c) calls for the Secretariat to prepare general principles for agreements between governments and the implementing agencies on new and renewed IS projects to incorporate the elements under 30/7 (b) and states that “these principles should emphasize that action to be undertaken should be stated in general terms only in the institutional strengthening agreement”.

16. This latter sentence was based on the recognition - as highlighted in earlier contributions from the Swedish delegation - that current practise of specifying activities, work plans, time tables and outputs in the IS agreement itself limits both the ability and the responsibility of the Ozone Unit to adapt its activities and tools, as time go by, to what the government considers to be the most effective way of achieving required reductions of the ODS consumption. Decision 30/7 therefore states instead - in (b)(vi) - that annual work plans should be prepared and then - in (d) - that the implementing agency should follow up the phase-out status and problems encountered by the Ozone Unit.

17. It is not clear from Annex II of your fax whether UNEP (and UNIDO), in addition to incorporating the new text, also intends to acknowledge the need for less detailed description of activities, work plans, time tables and outputs in the IS agreements - as called for in Decision 30/7 (c). The only exemption should be establishment of a reliable system to collect and monitor data on the ODS consumption, as is now well incorporated in section 4.1 Outputs, (iii), and - perhaps - a work plan for the first year of the IS project.

18. It can be noted that the new Format for Extension Requests for Institutional Strengthening projects will provide a useful tool for ExCom to follow up the implementation of Decision 30/7, in particular if the improvements suggested by the Swedish delegation in our fax of 4 October 2000 are incorporated.

UNDP

19. As summarized in your fax, UNDP notes that the agency should have no major problem with the elements mentioned in Dec. 30/7 (b) “since the preamble of para (b) “urges” all Art. 5 countries to ensure that the elements are followed”. UNDP proposes that the text of the Decision 30/7 (b) should be included in UNDP’s agreements under “Special Considerations”.

20. It is not clear from this description whether UNDP intends to take any other steps to promote the implementation of Dec. 30/7 (b) than just informing the government on the content of the decision.

World Bank

21. The description on what the World Bank intends to do to secure the implementation of Decision 30/7 (b) is even less informative than with regard to UNDP.

22. It is our hope that these comments can be help you in making the principles stated in Decision 30/7 (b) a reality.

Annex IV

Template of Amendment Letter from the World Bank

October 30, 2000

{MrMs} {Address}

Re: OTF Grant No. xxxxx (Ozone Protection Policy and Institutional Strengthening Project) – Amendment

Please refer to the Ozone Project Trust Fund Grant Agreement (...), dated, 19..., between (...) and the International Bank for Reconstruction and Development (hereinafter: “the World Bank”) acting as Trustee of grant funds provided by Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer into the Ozone Projects Trust Fund (OTF) (the Trustee) for the above referred Project.

We propose to amend the Ozone Projects Trust Fund Grant Agreement as follows:

Art. 3.xx is modified to read as follows:

Section 3.0x

The Recipient shall:

- (a) for purpose of Part X of the Project, establish and thereafter maintain during the executive of the Project, a national Ozone Unit within (the national authority).
- (b) take all action necessary or advisable to ensure that the national Ozone Unit all times:
 - (i) exercises the overall responsibility for the coordination and implementation of such part of the Project; and
 - (ii) is provided with adequate staffing, physical and financial resources.

Section 3.0x

The Recipient shall:

- (a) (i) make available to the national Ozone Unit the personnel and equipment financed out of the proceeds of the OTF Grant only for the task of eliminating ODS consumption and production; and

- (iii) appoint a high-level official in (the national authority), acceptable to the Bank, to exercise the overall supervision of the performance of the national Ozone Unit and ensure that any action necessary or advisable is taken to comply with the obligations of the Recipient under this Agreement;
- (b) (not later than ...) establish the necessary support structures for the national Ozone Unit, in the form of an advisory panel or a steering committee, satisfactory to the Bank, such structures to involve the appropriate authorities of the Recipient and representatives of the private sector and non-governmental organizations, and
- (c) from time to time, report to the Bank measures taken and problems encountered as required by decision of the Executive Committee of the Montreal Protocol.

Schedule 2 is modified to read as follows:

The Project consists of the following parts, subject to such modifications thereof as the Recipient and the Trustee may agree upon from time to time to achieve such objectives:

Part X: Institutional Strengthening and Dissemination

- (1) Provision of technical support to enhance the capacities of the Recipient to deal with ozone protection issues, and in particular, to carry out the following:
 - (a) action necessary to ensure that the national Ozone Unit establishes a reliable system to collect and monitor data on ozone depleting substances, exports and production.
 - (b) the preparation of annual work plans for the national Ozone Unit.

Sincerely,